

XXIV. Los jueces de partido en el pueblo de su residencia harán en público las visitas generales y semanales de cárcel en los dias y sitios que previenen los artículos LVI y LVIII del capítulo I, asistiendo sin voto a las primeras dos individuos del ayuntamiento nombrados por este, conforme al artículo LVII. Los jueces se arreglarán en unas y otras visitas a lo que se dispone en el artículo LIX, dando cuenta a la audiencia mensualmente del resultado de todas. Tambien pasarán a la cárcel siempre que algun preso pida audiencia, y le oirán cuanto tenga que exponer.

XXV. Los jueces de partido en la Península e islas adyacentes disfrutarán por ahora el sueldo anual de once mil reales de vellón, y los derechos de juzgado con arreglo a arancel. Estos sueldos se pagarán de los propios de los pueblos del partido, o en su defecto de otros arbitrios que las diputaciones provinciales propondrán a las cortes por medio de la regencia.

XXVI. En ultramar el capitán general de cada provincia, oyendo al intendente o jefe de hacienda de la misma, y a la audiencia o audiencias de su distrito, propondrá a la regencia, con remision del expediente, el sueldo de que deban gozar los jueces de partido de cada una, ademas de los derechos de arancel por ahora, teniendo consideracion a las circunstancias de los respectivos paises, y la regencia lo remitirá a las cortes con su informe. Estas propuestas se harán en el concepto de que ha de cesar la diferencia de las tres clases de estos jueces que ahora se hallan establecidas, y entretanto disfrutarán todos el sueldo de mil y quinientos pesos fuertes anuales, y los derechos mencionados.

XXVII. En lo sucesivo no se exigirán fianzas a los jueces de partido.

XXVIII. Estos jueces durarán en sus empleos seis años a lo mas; pero no cesarán en sus funciones hasta ser provistos en otro destino, si no hubiere justo motivo para suspenderlos o separarlos, conforme a la constitucion.

XXIX. Los jueces de partido serán substituidos en sus ausencias, enfermedad o muerte, por el primer alcalde del pueblo en que residan, y si alguno de los alcaldes fuese letrado, será preferido. En ultramar, si muriese o se imposibilitase el juez, el gefe político superior de la provincia, a propuesta de la audiencia, nombrará interinamente un letrado que le reemplace, y dará cuenta al gobierno.

XXX. Los vireyes, capitanes y comandantes generales de las provincias, y los gobernadores militares de plazas fuertes y de armas, se limitarán al ejercicio de la jurisdiccion militar, y de las demas funciones que le competen por ordenanza; y quedan suprimidos todos los demas gobiernos y corregimientos de capa y espada, como lo quedarán igualmente los corregimientos y tenencias de letras, las alcaldías mayores de cualquiera clase, y las subdelegaciones en ultramar, luego que hecha y aprobada la distribucion provisional de partidos, se nombren los jueces de ellos.

XXXI. Tambien quedan suprimidos los asesores que ademas de los auditores de guerra tienen los vireyes, capitanes o comandantes generales de algunas provincias, debiendo éstos asesorarse con los auditores para el ejercicio de la jurisdiccion militar que les compete.

XXXII. No debiendo haber, segun lo dispuesto en la constitucion, mas fueros privilegiados que el eclesiástico y militar, cesarán en el ejercicio de jurisdiccion todos los demas jueces privativos de cualquiera clase; y cuantos negocios civiles y criminales ocurran en cada partido, se tratarán ante el juez letrado del mismo, y los alcaldes de los pueblos, como se previene en esta ley. Exceptuense sin embargo los juzgados de la hacienda pública, los consulados y los tribunales de minería, que subsistirán por ahora segun se hallaban, hasta nueva resolución de las Cortes.

XXXIII. Las causas y pleitos pendientes en los juzgados privativos que se su-